

Bogotá D.C., [Orfeo. F_RAD_S]



Al responder cite este Nro.
202510001342781

Doctor

CAMILO ERNESTO ROMERO GALVAN

Comisión Quinta

Congreso de Colombia

Email: comision.quinta@camara.gov.co

La ciudad

ASUNTO: RESPUESTA A SU SOLICITUD MEDIANTE DERECHO DE PETICIÓN.

REFERENCIA: RESPUESTA RADICADO ANT 202562003398892.

Reciba un cordial saludo,

Nos permitimos responder el cuestionario en los siguientes términos:

Respecto del interrogante: “1. ¿Qué base legal utilizó la ANT para justificar la entrega de tierras dentro de un área protegida como el Páramo de Miraflores, y cómo se alinea esta decisión con las regulaciones ambientales vigentes, especialmente la Ley 99 de 1993?”, nos permitimos informar que la Agencia Nacional de Tierras (ANT), en su calidad de máxima autoridad sobre las tierras de la Nación, tiene como objeto la ejecución de la política de ordenamiento social de la propiedad rural formulada por el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural. En desarrollo de este mandato, le corresponde gestionar el acceso a la tierra como factor productivo, garantizar la seguridad jurídica sobre la misma, promover su uso conforme a la función social y ecológica de la propiedad, y administrar y disponer de los predios rurales de propiedad de la Nación.

Dentro de las funciones asignadas a la ANT se encuentra la facultad de adelantar todos los procedimientos necesarios para la adquisición directa de predios y mejoras, con destino a la constitución, ampliación, reestructuración y saneamiento de los resguardos indígenas, especialmente en favor de las comunidades étnicas asentadas en el territorio nacional. Esta competencia está prevista en los artículos 3° y 4° del Decreto 2363 de 2015, así como en el Decreto 2164 de 1995, normas compiladas en el Decreto Único Reglamentario 1071 del 26 de mayo de 2015.

En ese marco normativo, la ANT goza de autonomía para ejecutar los programas de acceso a tierras, administrar los bienes del Fondo Nacional Agrario, adelantar procesos de adquisición de tierras conforme a lo dispuesto en la Ley 160 de 1994, asesorar a la ciudadanía en las transacciones de predios rurales, hacer seguimiento a los procesos en curso y ejecutar las políticas formuladas por el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural. Cabe precisar que, durante los procedimientos de adquisición, las comunidades campesinas, las alcaldías y los concejos municipales podrán presentar intervenciones u oposiciones en calidad de terceros interesados, a efectos de expresar sus observaciones o inquietudes, particularmente en relación con los posibles impactos derivados del proceso, en caso de que resulte viable.

Ahora bien, en cuanto al predio El Paraíso, identificado con folio de matrícula inmobiliaria No. 202-525 y ubicado en el municipio de Gigante, departamento del Huila, se informa que fue adquirido por la Agencia Nacional de Tierras mediante Escritura Pública No. 1337 del 21 de julio de 2023, otorgada por la Notaría Treinta del Círculo de Bogotá. Posteriormente, el 24 de agosto del mismo año, se realizó la entrega provisional del predio al Resguardo Indígena San Andrés de Pisimbalá.

Se informa que este ha sido adquirido por solicitud de la comunidad indígena San Andrés de Pisimbalá, pero bajo el cumplimiento de preceptos y normativa ambiental, y su adquisición no debe entenderse como una sustracción del área protegida, ni mucho menos que desde la ANT se pretenda darle una destinación para un uso de explotación agropecuaria, sino justamente, sobre la condición de emplearse en actividades de protección y restauración ambiental, bajo estricto apego de la normatividad de usos ambientales permitidos, según los conceptos de la propia Corporación Autónoma Regional del Alto Magdalena – CAM.

Sobre el particular, se tiene que mediante comunicación con radicado CAM No. 20231020003671 del 05 de enero de 2023, la Corporación Autónoma Regional del Alto Magdalena – CAM, remitió en su momento el informe de usos permitidos en el PNR Páramo de Miraflores, en el cual se determinó que se puede realizar actividades de: *Ecoturismo científico y paisajismo dirigidos y adecuados a la capacidad de carga de los ecosistemas, restauración y manejo silvicultural del bosque natural, Apicultura y melicultura, producción agrícola, pecuaria y forestal tecnificadas, ganadería con rotación de potreros, reforestación productora, establecimiento de sistemas de producción sostenibles tipo agroforestal (agrosilvícola, silvopastoril, agrosilvopastoril), y plantaciones forestales con cultivos temporales*, entre otros, teniendo además una lista de usos condicionados.

Lo anterior, desvirtúa que la comunidad indígena no pueda realizar ningún tipo de actividad económica que se compagine con la destinación de protección ambiental del predio. Distinto sería que el predio se hubiera entregado a una comunidad campesina, donde de manera específica la destinación de la tierra adquirida debe darse con fines de producción agropecuaria, y donde además es taxativa la prohibición de adjudicar predios con medidas de protección ambiental a campesinos, como la de un parque natural regional o nacional.

Siendo así que la ANT adquirió el predio El Paraíso, el cual además no se superpone en un 100% con el área protegida, a una comunidad indígena bajo la condición de seguir la normativa ambiental de usos permitidos, y con ello se recalca que en el Informe de Necesidad de la Tierras de la DAE definió lo siguiente:

- *Recomendaciones:*

Evitar el sobrepastoreo y las malas prácticas agrícolas, con el fin de mitigar la pérdida de la cubierta vegetal, disminuir el empobrecimiento del suelo y de la vegetación.

Aplicar medidas de restauración y recuperación de los ecosistemas como crear bancos de semillas, aportarle nutrientes al suelo y plantar árboles.

Finalmente, se le sugiere a los integrantes de la comunidad étnica, tener presentes las observaciones que den lugar por parte de las autoridades competentes regionales frente a las zonas de protección y reserva que se encuentran dentro predio Paraíso, relacionadas con la función social y ecológica de la propiedad.

Así mismo, quedó sentado el compromiso de la comunidad indígena, de realizar labores de protección ambiental y que, en todo caso, la comunidad debe siempre tener en cuenta las observaciones que se presenten por parte de las autoridades ambientales competentes.

De conformidad con lo anterior, la Agencia Nacional de Tierras (ANT) fundamenta su actuación principalmente en:

- Ley 160 de 1994, artículos 85 y 87, que facultan a la autoridad de tierras para adquirir predios destinados a la constitución y ampliación de resguardos indígenas, incluso si estos tienen

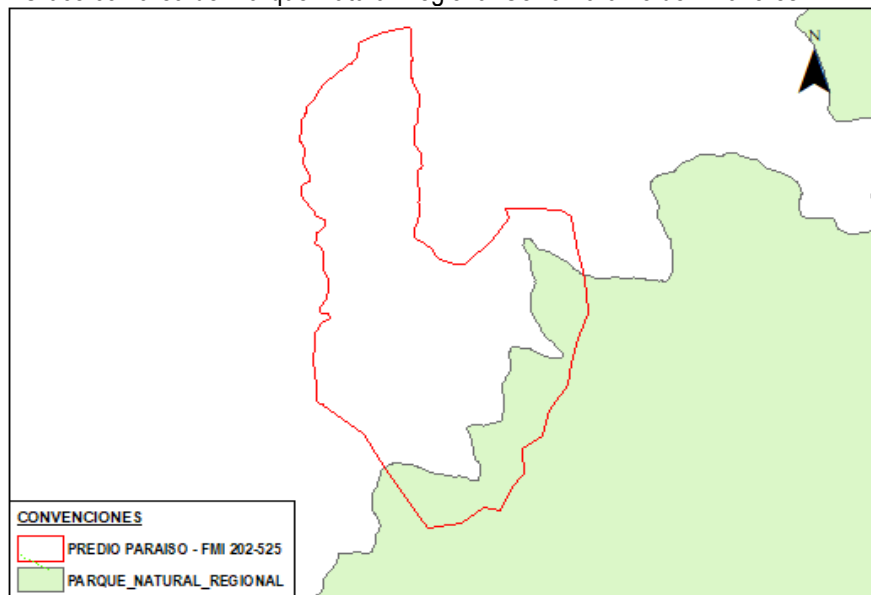
afectaciones ambientales, siempre bajo el cumplimiento de la función social y ecológica de la propiedad.

- Decreto 2666 de 1994 y Decreto 1071 de 2015, que reglamentan y compilan el procedimiento de adquisición de predios para comunidades étnicas.

En relación con la Ley 99 de 1993, la ANT señala que su actuación no implica sustracción del área protegida ni habilita usos prohibidos; por el contrario, la entrega se condiciona al estricto cumplimiento de las determinaciones ambientales y de la CAM, lo que asegura la protección de los recursos naturales conforme al artículo 58 de la Constitución y la ley ambiental.

Respecto del interrogante: “2. Información sobre el área total del predio adquirido (en hectáreas), indicando qué porcentaje de esta se encuentra dentro del Parque Natural Regional Cerro Páramo de Miraflores y de la Reserva Forestal de la Amazonía, con base en la zonificación ambiental vigente y su clasificación por tipo (A, B o C) (...)”, nos permitimos informar que en relación con el predio denominado “El Paraíso”, identificado con el Folio de Matrícula Inmobiliaria No. 202-525 y ubicado en el municipio de Gigante, departamento del Huila, este presenta un área total de 222,3449 hectáreas, de las cuales 44,3608 hectáreas corresponden a superficie que se traslapa con el Parque Natural Regional Cerro Páramo de Miraflores, lo que equivale al 19,9513 % de su extensión total, conforme se evidencia en la representación cartográfica que se adjunta a continuación.

1.1 Cruce con área del Parque Natural Regional Cerro Páramo de Miraflores:

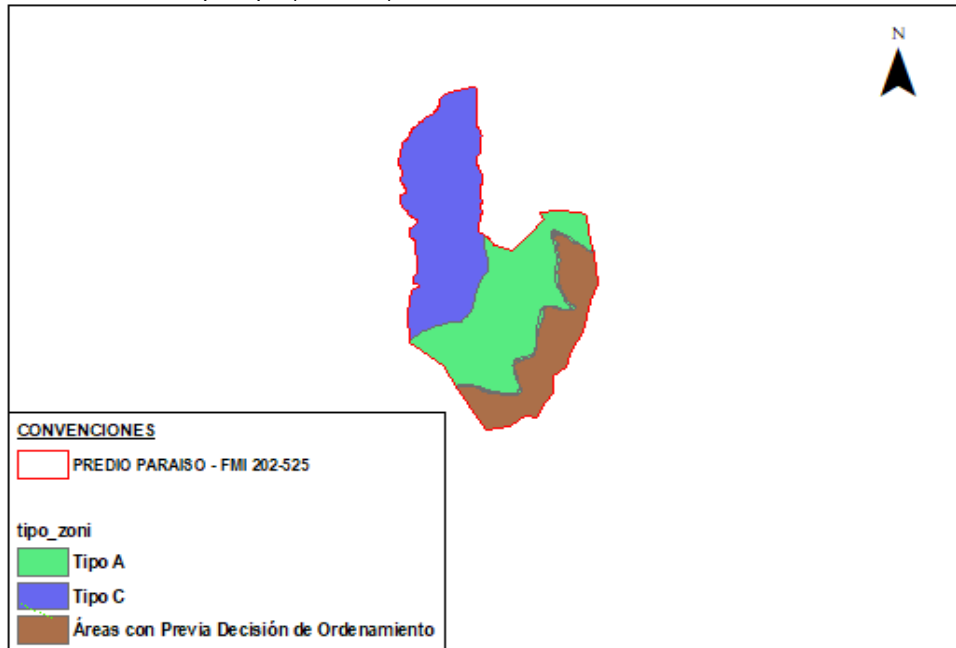


DETERMINANTES AMBIENTALES	
PARQUE_NATURAL_REGIONAL	
OBJECTID	1
NOMBRE	CERRO PARAMO DE MIRAFLORES RIGOBERTO URRIAGO
RESOLUCION	12
ORGANIZACIÓN	CAM
FECHA_DESCARGA	2023-02-01 14:00:12.834000

ÁREA TOTAL DEL PREDIO (FMI 202 – 525)	222,3449 Ha
ÁREA DE TRASLAPE CON EL PARQUE NATURAL REGIONAL	44,3608 Ha (19,9513 %)

Ahora bien, a continuación, se remite representación gráfica del predio denominado “**El Paraíso**”, identificado con el **Folio de Matrícula Inmobiliaria No. 202-525** y ubicado en el municipio de Gigante, en cuanto a:

1.1 Cruce con área Reserva Forestal de la Amazonía, zonificación ambiental vigente y su clasificación por tipo (A, B o C)



CUADRO DE RESUMEN DEL TRASLAPE CON ZONIFICACION LEY SEGUNDA 2022		
TIPO ZONIFICACIÓN	AREA_DE TRASLAPE	PORCENTAJE
Tipo C	91,1022 Ha	0,409734
Tipo A	81,8095 Ha	0,36794
Áreas con Previa Decisión de Ordenamiento	46,4597 Ha	0,208953

Respecto del interrogante: “3. ¿Cómo justifica la Agencia Nacional de Tierras el uso de tierras en un área protegida como el Páramo de Miraflores para reforma agraria?”, nos permitimos informar que la Agencia Nacional de Tierras desde la Dirección de Asuntos Étnicos de la Agencia Nacional, se argumenta que:

- La compra no es para reforma agraria campesina sino para dotación de tierras a comunidad indígena, un procedimiento distinto y permitido legalmente en áreas protegidas.
- Los resguardos indígenas pueden constituirse dentro de áreas protegidas, a diferencia de lo que ocurre con consejos comunitarios afro o comunidades campesinas.
- La comunidad beneficiaria aceptó la adquisición con conocimiento de las restricciones y con compromiso expreso de destinar el predio a protección y restauración ambiental.
- La jurisprudencia constitucional respalda que las comunidades indígenas pueden desarrollar actividades compatibles con la conservación.

Respecto del interrogante: “4. Refiera los elementos técnicos y jurídicos que fundamentan la decisión de adquirir y/o adjudicar dicho predio, en el marco de las restricciones ambientales aplicables, y los mecanismos considerados para armonizar esta actuación con lo dispuesto en el Decreto 1076 de 2015, el Acuerdo 009 de 2019 de la CAM, el Convenio 169 de la OIT, y la jurisprudencia constitucional (incluyendo, entre otras, las sentencias C-649 de 1997 y C-723 de 2007) (...)”, nos permitimos informar que Justamente en ese punto se expone que la Agencia Nacional de Tierras no puede realizar adjudicaciones en predios afectados bajo figuras de protección ambiental a comunidades campesinas, pero sí puede adjudicar o formalizar este tipo de predios a comunidades indígenas, puesto que así se permitió en el procedimiento de acceso a tierras para comunidades indígenas, según lo establecido en la Ley 160 de 1994, el Decreto Único Reglamentario 1071 de 2015, e inclusive bajo lo dispuesto en el Decreto 1076 de 2015, del sector Ambiente y Desarrollo Sostenible. Lo anterior, además se da en reconocimiento de las buenas prácticas y lucha histórica por la protección ambiental que han realizado las comunidades indígenas en el territorio colombiano.

Ampliando lo anteriormente expuesto, resulta pertinente poner de presente que, en el régimen jurídico colombiano, si bien los parques naturales son generalmente inalienables según el artículo 63 de la Constitución Política, existe un régimen especial que permite la compra o adjudicación de tierras dentro de parques naturales para comunidades indígenas, en desarrollo de sus derechos colectivos y ancestrales.

Con todo, las consideraciones normativas expuestas en el Decreto 1071 de 2015, sobre la procedibilidad de realizar titulaciones a comunidades indígenas en áreas de parques naturales, desde el legislador colombiano se reconoce un enfoque diferencial, que exalta el compromiso de las comunidades étnicas y su armonización de actividades de vida con el cuidado de medio ambiente, razón por la cual a su vez se determina que las prácticas de comunidades indígenas siempre debe estar alineada con los usos permitidos en la áreas protegidas, y con la función social y ecológica de la propiedad, de conformidad con el ordenamiento jurídico colombiano.

Esto a su vez resulta concordante con las conclusiones del informe realizado por la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura que concluye bajo evidencia científica, que los pueblos indígenas y tribales son los mejores guardianes de los bosques de América Latina y el Caribe, gracias a su conocimiento tradicional, su relación cultural con la naturaleza y la gestión colectiva de sus territorios.

Respecto del interrogante: “5. ¿Qué estudios o evaluaciones realizó la ANT para determinar la idoneidad de los predios Paraíso, para la reforma agraria, considerando su ubicación dentro de un área protegida?”, nos permitimos informar que, desde la Dirección de Asuntos Étnicos de la Agencia Nacional de Tierras, se realizaron los siguientes, las cuales se remiten adjuntas al presente oficio de respuesta:

- Informe de visita técnica agroambiental, identificando viabilidad del uso bajo normativa ambiental.
- Informe de Necesidad de la Tierras.
- Requerimiento a la CAM.
- Salidas gráficas.

Respecto del interrogante: “6. ¿Realizó la ANT una evaluación de impacto ambiental previa para la entrega de estos predios, y de ser así, ¿cuáles fueron las conclusiones y cómo se mitigaron los riesgos identificados?”, nos permitimos informar que en el marco del procedimiento de compra no se exige la

realización de estudios de impacto ambiental, ya que estos corresponden a los trámites propios del licenciamiento ambiental cuando así lo exige el tipo de uso o intervención sobre el territorio.

En cuanto a las medidas adoptadas para garantizar que el proceso de acceso a tierras no vulnere el régimen legal de protección ambiental, se informa que durante el proceso de compra se realizaron las advertencias pertinentes a la comunidad beneficiaria. Así mismo, en el informe social se consignaron recomendaciones orientadas a mitigar los impactos negativos sobre los ecosistemas, entre ellas:

- Evitar el sobrepastoreo y las malas prácticas agrícolas, con el fin de reducir la pérdida de la cobertura vegetal y el empobrecimiento del suelo y la biodiversidad.
- Implementar medidas de restauración y recuperación de los ecosistemas, como la creación de bancos de semillas, el aporte de nutrientes al suelo y la siembra de árboles nativos.

Adicionalmente, se recomienda a los integrantes de la comunidad étnica tener en cuenta las observaciones que eventualmente emitan las autoridades ambientales regionales respecto de las zonas de protección y reserva ubicadas dentro del predio El Paraíso, en atención a la función social y ecológica de la propiedad.

Finalmente, se deja constancia de que el proceso de adquisición del predio El Paraíso, adelantado por la Dirección de Asuntos Étnicos de la ANT, no configura una vulneración de la normativa ambiental ni de las disposiciones relativas al uso de suelos de conservación. Por el contrario, a la comunidad del Resguardo San Andrés de Pisimbalá se le informó que el uso del predio está orientado a la conservación ambiental, con posibilidad de implementar proyectos de agricultura sostenible y actividades de reforestación. En consecuencia, su destinación no contempla actividades de producción agropecuaria intensiva ni asentamientos campesinos, lo que asegura la compatibilidad del proceso con la normatividad vigente en materia de protección ambiental y áreas protegidas, incluyendo las disposiciones aplicables a los Parques Naturales.

Respecto del interrogante: “7. *¿Qué medidas específicas ha implementado la ANT para garantizar que la reforma agraria en el Páramo de Miraflores no afecte la conservación de este ecosistema, y cómo se ha coordinado con las autoridades ambientales como el MinAmbiente y la CAM.*”, nos permitimos informar que el Decreto Ley 902 del 29 de mayo 2017, por el cual se adoptan medidas para facilitar la implementación de la Reforma Rural Integral contemplada en el Acuerdo Final en materia de tierras, específicamente el procedimiento para el acceso y formalización y el Fondo de Tierras, en su artículo 67., ordena la elaboración del informe técnico jurídico ITJ Preliminar, Planos y Registro de Sujetos de Ordenamiento RESO. La Agencia Nacional de Tierras, realiza informes técnicos jurídicos que servirán de sustento para la decisión administrativa que corresponda según el asunto objeto de ordenamiento social de la propiedad rural.

En lo que compete al desarrollo y análisis técnico, el procedimiento único no contempla la expedición de conceptos técnicos de las autoridades ambientales en función de incorporarlos en los ITJS para dar continuidad de los trámites de solicitudes de formalización de la propiedad privada rural; no obstante, dentro de los informes técnicos jurídicos se realizan análisis y cruces de capas geográficas de determinantes del ordenamiento social de la propiedad rural, restricciones y condicionantes que aparecen señaladas en las normas o situaciones de índole ambiental que, deben ser estudiadas y analizadas antes de adelantar acciones tendientes al desarrollo de procesos formalización.

El análisis de determinantes ordenamiento social de la propiedad rural busca orientar, técnica y metodológicamente la incorporación y análisis de elementos asociados a los componentes ambientales, de riesgo y sectoriales sobre procedimientos establecidos al interior de la ANT. Este ejercicio de análisis y cruce de capas se realiza a través del Módulo de Información Geográfica para el Ordenamiento MIGO de la ANT.

Adicionalmente entre las acciones concretas implementadas se destacan:

1. Exclusión de áreas delimitadas como páramo en procesos de adjudicación y formalización: Antes de adelantar cualquier actuación administrativa, la ANT realiza un cruce geoespacial con la cartografía oficial, los actos de delimitación expedidos por MinAmbiente y el Sistema de Información Ambiental de Colombia (SIAC), con el fin de excluir, de manera preventiva, áreas ubicadas dentro del páramo o en su zona de amortiguación estricta.
2. Alineación con la Ley de Páramos (Ley 1930 de 2018): La ANT ha incorporado en sus protocolos internos la prohibición de adjudicar, formalizar o adquirir tierras destinadas a actividades agropecuarias, mineras o industriales en zonas delimitadas como páramo, salvo que se trate de procesos de reconversión productiva o restauración ecológica, lo que se articula con el artículo 4 de dicha ley.
3. Armonización con los Planes de Manejo Ambiental: Cualquier intervención en áreas aledañas al páramo se ajusta a los lineamientos definidos en los Planes de Manejo Ambiental adoptados por la CAM, garantizando que los usos del suelo sean compatibles con la conservación de los servicios eco sistémicos y la recarga hídrica que provee el páramo.
4. Cláusulas ambientales en actos administrativos: En los procesos de adjudicación, la ANT incorpora cláusulas resolutorias que condicionan el derecho de propiedad al cumplimiento de prácticas sostenibles y al no desarrollo de actividades prohibidas en zonas de protección. Su incumplimiento habilita a la entidad para revertir la adjudicación o ejercer acciones legales.
5. Articulación interinstitucional permanente: Se han fortalecido los canales de coordinación con MinAmbiente, la CAM, el IGAC, Parques Nacionales Naturales y las Alcaldías locales, a través de mesas técnicas para revisar casos concretos, validar la información geográfica y concertar alternativas productivas sostenibles con las comunidades.
6. Incorporación del enfoque de desarrollo rural sostenible: La ANT promueve, con apoyo del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural y el Ministerio de Ambiente, proyectos agroecológicos, sistemas silvopastoriles y prácticas de restauración que permiten compatibilizar el acceso a la tierra con la protección de la biodiversidad.

Respecto del interrogante: “8. ¿Qué mecanismos de monitoreo y evaluación ha establecido la ANT para garantizar que la reforma agraria en el Páramo de Miraflores se realice de manera sostenible y sin impactos ambientales negativos?”, nos permitimos informar que la Agencia Nacional de Tierras no cuenta con un mecanismo específico de monitoreo y evaluación respecto del cumplimiento de la función social y ecológica de la propiedad por parte de las comunidades étnicas, toda vez que dicha labor no constituye una obligación legal asignada a esta Entidad.

No obstante, conforme al marco normativo vigente, las comunidades étnicas se encuentran sujetas al principio de función social y ecológica de la propiedad. En ese sentido, corresponde principalmente a las Corporaciones Autónomas Regionales y Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible la verificación, seguimiento y, en su caso, la emisión de alertas sobre el cumplimiento o incumplimiento de dicho principio por parte de los resguardos indígenas.

En relación con el caso objeto de análisis, la Agencia Nacional de Tierras manifiesta que, a la fecha, no tiene conocimiento de documento alguno que acredite el incumplimiento de la función social y ecológica de la propiedad por parte del resguardo indígena, ni que evidencie que las actuaciones de la comunidad se encuentren en contravención de dicho mandato constitucional y legal.

Ahora bien, con el fin de garantizar que las intervenciones en el área de influencia del Páramo de Miraflores se desarrollen bajo parámetros de sostenibilidad, la ANT ha implementado medidas de monitoreo y evaluación que tienen en cuenta control social y articulación institucional. Este sistema se soporta en los siguientes mecanismos:

- Sistema Integrado de Monitoreo Geoespacial (SIG-Tierras): Plataforma que integra información catastral, cartografía oficial, delimitaciones de páramo y datos de cobertura del suelo, permitiendo detectar cambios no autorizados en el uso de la tierra y activar alertas tempranas en coordinación con la CAM y MinAmbiente.
- Visitas técnicas de verificación en campo: Equipos técnicos de la ANT, en conjunto con funcionarios de la CAM y autoridades locales, realizan inspecciones periódicas a los predios intervenidos para verificar el cumplimiento de las obligaciones ambientales y levantar actas de hallazgos, las cuales son incorporadas al expediente administrativo.
- Planes de Manejo Predial con enfoque ambiental para los predios cercanos al páramo, la ANT promueve la formulación participativa de planes que incluyan prácticas de conservación, protección de rondas hídricas, manejo de coberturas vegetales y reconversión productiva.
- Indicadores de sostenibilidad y reportes semestrales: Se han definido indicadores clave como conservación de coberturas, calidad de agua, presencia de especies nativas y adopción de prácticas agroecológicas.
- Participación comunitaria y veedurías ciudadanas: Se fomenta la conformación de veedurías integradas por beneficiarios de la Reforma Agraria, comunidades locales, organizaciones ambientales y autoridades de control, para hacer seguimiento directo a las intervenciones y denunciar posibles infracciones ambientales.
- Coordinación con compromisos internacionales: El seguimiento incorpora criterios y estándares derivados de compromisos ambientales internacionales asumidos por Colombia, como el Acuerdo de Escazú (participación y acceso a información), el Convenio sobre la Diversidad Biológica y la Agenda 2030 (ODS 15 – Vida de ecosistemas terrestres).
- Medidas preventivas y correctivas: Ante la detección de impactos negativos, la ANT activa medidas correctivas que incluyen desde requerimientos formales al adjudicatario, hasta la reversión del predio o la denuncia ante las autoridades competentes por presunta infracción ambiental.

Con esta combinación de exclusión preventiva, condicionamiento jurídico, seguimiento técnico y participación ciudadana, se busca garantizar que la Reforma Agraria en el Páramo de Miraflores se realice bajo un modelo de compatibilidad plena entre desarrollo rural y conservación de ecosistemas estratégicos, evitando la degradación de uno de los principales proveedores de agua y biodiversidad del país.

Respecto del interrogante: “9. Favor explicar por qué en Oficio de respuesta del señor Director de la Agencia Nacional de Tierras a solicitud de información del senador CARLOS JULIO GONZÁLEZ VILLA sobre el proceso de compra del predio denominado “El Paraíso”, ubicado en la vereda La Pradera del Municipio de Gigante del departamento del Huila, que se traslapa con el área del Parque Natural Regional Cerro Páramo de Miraflores, con destino a la comunidad del Resguardo Indígena San Andrés de Pisimbalá-Pueblo Nassa- del Cauca, se citan en la Sentencia C-361 de 2024 como consideraciones de la Corte Constitucional, lo que realmente corresponde a lo señalado en oficio conjunto de fecha 21 de noviembre de 2023 que el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible y la Unidad Administrativa

Especial de Parques Nacionales, remitieron a la Corte Constitucional, en relación con los interrogantes formulados por la misma, oficio que es citado como prueba en 1. ANTECEDENTES. D. Pruebas recibidas. (iv) Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible y Unidad Administrativa Especial Parques Nacionales Naturales?”, nos permitimos informar que se citó la sentencia C-361 de 2024, toda vez que, la Corte Constitucional resolvió una demanda de inexequibilidad sobre el artículo 6, literal g) de la Ley 70 de 1993, el cual establece de manera expresa la prohibición de realizar titulación colectiva en favor de consejos comunitarios, en áreas de Parques Nacionales, frente a lo cual la Corte resolvió su exequibilidad. Sobre el particular, vale la pena tener en cuenta que, en el texto de la demanda, se alegaba una vulneración del derecho a la igualdad, toda vez que las comunidades indígenas gozan de un régimen jurídico excepcional que les permite que sobre parques naturales se constituyan resguardos indígenas, lo que no ocurre por mandato expreso de la Ley 70 de 1993.

Por consiguiente, si bien en la sentencia se aborda en qué medida resulta exequible la exclusión de titulación colectiva para consejos comunitarios en áreas de parques naturales, se reconoce por la Corte que, en situación de territorios indígenas, procede, tanto la constitución de un parque natural dentro de un resguardo indígena, como la propia constitución de un resguardo en un parque natural. Aseveró además la Corte que, pese a las semejanzas entre las comunidades negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras (NARP), no pueden obviarse las particularidades, y regímenes normativos específicos, de cuya consideración se destacan los siguientes apartes de la mencionada sentencia:

Ahora bien: sin perjuicio del reconocimiento del derecho a la propiedad colectiva de los grupos étnicos como expresión de la protección al territorio, dado el carácter inescindible que posee respecto de su existencia y sus modos de vida, es pertinente advertir que, aunque este Tribunal ha afirmado que los pueblos indígenas y las comunidades NARP son asimilables en materia de reconocimiento de su identidad y derechos en virtud de que unos y otras están cobijadas por el mandato superior de reivindicación de la diversidad e integridad étnica y cultural y, por tanto, “tienen derecho a la subsistencia, de acuerdo con sus formas y medios tradicionales de producción dentro de sus territorios” a la luz de lo que se ha denominado “proceso de etnización” también es cierto que se ha señalado que de allí no se desprende la consecuencia de suprimir automáticamente las diferencias entre ambos conglomerados.

En palabras de la Corte, “[e]llo no significa que el contenido de la protección sea idéntica, puesto que se debe ajustar a las particularidades culturales, las especificidades del régimen legal de los grupos étnicos y a la historia de los mismos [...] El mencionado reconocimiento ha implicado una asimilación en relación con los derechos que tienen los pueblos indígenas y las colectividades negras, similitud que busca romper la división artificiosa en relación con el régimen jurídico creada desde la época hispánica y que invisibilizó con mayor intensidad el pasado africano. Sin embargo, ese acercamiento no aparece eliminar las diferencias de esos grupos étnicos, pues la Constitución reconoce sus particulares ancestrales, sus historias paralelas y la posibilidad de regímenes normativo específicos en algunos aspectos, como sucede con el sistema de atención en salud y la representación política”.

De conformidad con lo anterior, reconoce la Corte fundamentada la diferenciación de regímenes jurídicos aplicables a comunidades NARP frente a comunidades indígenas, donde para las primeras no se puede constituir con territorio colectivo sobre un área protegida ambientalmente, lo que en cambio sí está contemplado tanto legal como jurisprudencialmente para comunidades indígenas.

Luego de lo anterior, se llama la atención de que, en cuanto al proceso de compra del predio El Paraíso FMI 202-525, se tiene que este proceso se realizó, no en favor de un consejo comunitario o de comunidades negras, afrocolombianas, raizales o palenqueras, o comunidades campesinas, donde sí hay prohibiciones normativas EXPRESAS de adelantar tales procesos, sino para comunidades indígenas,

donde sí se tiene el sustento normativo en el ordenamiento jurídico colombiano para adelantar dichos procedimientos. Lo anterior además reconociendo que los resguardos indígenas deben cumplir con las normas ambientales que son de imperativo cumplimiento, y que además estas comunidades han sido históricamente las mayores protectoras del medio ambiente.

Por su parte, de las consideraciones antes expuestas, vale la pena mencionarle que en la respuesta remitida por Parques Nacionales Naturales a la Corte Constitucional, en el marco de su intervención dentro del proceso de la demanda, se alude a un documento de dicha entidad que se titula “Parques con gente”, lo cual muestra un diametral cambio de postura por parte de la autoridad nacional de Parques Nacionales, en tanto que previamente se adoptaba una estrategia de “parques sin gente” donde se buscaba sacar a cualquier ocupante de los parques, sin tratar de involucrar a las personas en los procesos de protección ambiental.

Respecto del interrogante: “10. Favor explicar ¿por qué en el mismo Oficio, se cita la sentencia T-378^a como parte de las consideraciones de la Sentencia C-361 de 2024, como fundamentación del régimen jurídico especial para la titulación de comunidades indígenas en áreas protegidas ambientalmente, cuando realmente no está citada en las consideraciones de la Corte Constitucional? En los salvamentos de voto se cita la sentencia 384A-14, en cuyas consideraciones la Corte Constitucional no avala que se puedan comprar predios para ser entregados a comunidades indígenas que no habitan en un Parque Natural, sino que concluye que “no resulta cierta la idea, según la cual, la declaración de Parque Nacional Natural habrá de conducir ineluctablemente a la destrucción de la identidad cultural y las tradiciones de las colectividades que han habitado ancestralmente los terrenos en objeto de la declaración”, nos permitimos informar que en el presente contexto, se citó la referida sentencia como fundamento del régimen jurídico especial aplicable a la titulación de comunidades indígenas en áreas ambientalmente protegidas. Sin embargo, tanto la Sentencia T-378A como la Sentencia C-361 de 2024 fueron referidas en la medida en que contienen consideraciones de la Corte Constitucional relacionadas con la titulación de resguardos indígenas ubicados en parques naturales nacionales y otras áreas sujetas a protección ambiental.

Respecto del interrogante: “11. Favor explicar ¿Por qué en el mencionado oficio se cita el artículo 2.2.2.1.9.2 del Decreto 1076 de 2015, como soporte normativo de la compra de un predio dentro de un Parque Natural Regional con destino a una comunidad indígena que no viene ocupando dicha área antes de la declaratoria del Parque, cuando dicha norma se refiere a la declaratoria de un parque nacional natural, cuando haya de incluirse, total o parcialmente un área ocupada que ya viene siendo ocupada por grupos indígenas de tal forma que se respete la permanencia de la comunidad?”, respetuosamente la Dirección de Asuntos Étnicos de la Agencia Nacional de Tierras, presenta excusas a esa Honorable Corporación por haberse citado en el oficio mencionado el artículo 2.2.2.1.9.2 del Decreto 1076 de 2015 como fundamento normativo, toda vez que su alcance se limita de manera exclusiva a los Parques Nacionales Naturales, no siendo aplicable a los Parques Nacionales Regionales ni a otras áreas protegidas donde la comunidad indígena no estuviera asentada con anterioridad a la declaratoria.

En consecuencia, la referencia a esta norma en el oficio mencionado no corresponde al marco jurídico aplicable para la adquisición de un predio dentro de un Parque Natural Regional con destino a una comunidad indígena que no ocupaba previamente esa área. En este caso, la actuación debe regirse por la normativa del Sistema Regional de Áreas Protegidas, la Ley 99 de 1993, las disposiciones ambientales del Decreto 1076 de 2015 relativas a áreas protegidas regionales y los actos administrativos expedidos por la autoridad ambiental competente.

Respecto del interrogante: “12. Favor explicar el estado de respuesta frente a los oficios enviados por la CAM en marzo y noviembre de 2024, así como sobre la orden judicial emitida en la sentencia del 2 de mayo de 2025. Indicar si ya se dio cumplimiento a la misma o si existe alguna actuación pendiente.”, nos permitimos remitir adjunto radicado de salida No. 202550000606411 del 26 de mayo de 2025, mediante el

cual, desde la Dirección de Asuntos Étnicos de la ANT, se le da respuesta directamente al Dr. Camilo Augusto Agudelo Perdomo Director General de La Corporación Autónoma Regional del Alto Magdalena – CAM respecto al presente requerimiento.

Anexos:

- Informe Agroambiental
- Informe de la Necesidad de la Tierra
- Requerimientos a la CAM
- Salidas Graficas
- Radicado de salida ANT No. 202550000606411.

No siendo otro el motivo, esperamos de esta manera haber dado respuesta de fondo a la petición incoada.

Cordialmente,



JUAN FELIPE HARMAN ORTIZ
Director General

Insumos: DAE, DAT.

Proyectó: Alejandro Alonso Castro – Abogado Contratista ANT

Revisó: Andrea Galvis Flórez - Abogado Contratista ANT

Aprobó: Andrés Fuerte Posada - Asesor de Dirección General